

DE 'GUERRA CONTRA EL INVASOR' A 'GUERRA FRATRICIDA'*

Santos Juliá

REBELIÓN Y REVOLUCIÓN

Los españoles que en la tarde del 17 de julio comenzaron a oír los rumores de una rebelión militar en las provincias de África no se llevaron una inesperada sorpresa: ésta era la cuarta vez que en menos de quince años se producía un intento de golpe de Estado. La historia comienza realmente cuando los militares vuelven a intervenir en el normal desarrollo de la política con el propósito de imponer por las armas un cambio de gobierno. Eso fue lo que ocurrió con el golpe del general Miguel Primo de Rivera en septiembre de 1923, primera lección que los españoles del siglo XX recibían acerca de la legitimidad del recurso a la violencia y a las armas para derribar un gobierno, alcanzar el poder y cambiar de hecho un régimen político. Su éxito fácil y el abrazo del rey al dictador sirvieron como una invitación a que cada cual lo intentara de nuevo. En junio de 1926 y en enero de 1929, los liberales dinásticos conspiraron con militares adeptos a su causa para derrocar por la fuerza al dictador; en agosto de 1930 los republicanos emprendieron la misma senda y constituyeron un comité revolucionario al que se sumaron los socialistas para prestar el calor de una huelga general a lo que en principio se había programado como un insurrección militar. La imagen de militares insurgentes y pueblo en la calle, fraternizando en la común exaltación que produce la conquista del poder, recuperó su empañado prestigio.

La Dictadura de Primo de Rivera acabó por legitimar lo que cincuenta años de un parlamentarismo fraudulento no lograron erradicar: la convicción de que donde se pusiera un militar dispuesto a hacerse oír, o donde el pueblo volviera a beber otra vez en las fuentes de la sacra insurgencia española, invocada por un penalista tan distinguido como Luis Jiménez de Asúa, las urnas debían callar. Comenzó así el ciclo de lo que Enric Ucelay-Da Cal ha definido como levantamientos plebiscitarios. La República sufrió algunos cuando se recurría a las armas en nombre del pueblo o se presentaba un golpe de Estado como un alzamiento nacional. Lo intentaron los anarcosindicalistas de la CNT con la llamada a la huelga general insurreccional contra los gobiernos presididos por Manuel Azaña y Diego Martínez Barrio en 1932 y en 1933; lo intentaron los militares, cuando un grupo de jefes creyó en agosto de 1932 llegada la hora de echar por tierra al gobierno de coalición republicano-socialista; lo intentaron los socialistas de la UGT y del PSOE y los nacionalistas de izquierda catalanes con una revolución en octubre de 1934. Y como

* Extractos del prólogo a Santos Juliá, coord., *Víctimas de la Guerra Civil*, Madrid, Temas de Hoy, 1999.

resultado o incitación a la rebelión o a la revolución, la legitimación de la violencia en nombre de la sociedad pasada o de la futura: de la revista monárquica *Acción Española* al periódico anarcosindicalista *Solidaridad Obrera*, la violencia fue cortejada como gran partera de la historia. El mundo futuro, que esperaba la revolución, o el mundo pasado, que anhelaba la reacción, habría de nacer o renacer entre dolores de parto.

La rebelión de julio de 1936 pertenece con pleno derecho a este ciclo de levantamientos plebiscitarios, pero su resultado fue muy diferente a todos los anteriores. En septiembre de 1923, el golpe militar triunfó sin ningún problema, como sin mayor problema fueron sofocadas las sucesivas conspiraciones liberales; en diciembre de 1930, el intento de huelga general e insurrección armada convocado por el comité revolucionario fue un completo fiasco, con los tranvías fuera de las cocheras y los soldados dentro de los cuarteles; las insurrecciones anarcosindicalistas de 1932 y 1933, con su coletazo en diciembre de ese mismo año, acabaron en el exilio de sus jefes, tras intervenciones masivas del ejército; el golpe militar del general Sanjurjo no encontró en agosto de 1932 complicidades suficientes ni en las fuerzas armadas ni en las de seguridad y acabó en una patética derrota; violenta, con enfrentamientos armados y una dura represión, fue la revolución de octubre de 1934, pero frente a un ejército unánime en la defensa de la legalidad se demostró una vez más la imposibilidad de un triunfo revolucionario.

Lo nuevo en 1936, y lo decisivo para el posterior desarrollo de los hechos, fue la fractura dentro del ejército y de las fuerzas de seguridad. Una guerra civil era impensable en el verano de 1936 sin esa fragmentación de la corporación militar, pues en ningún sitio, excepto en los cuarteles, había armas que tomar por más que no faltara gente dispuesta a empuñarlas. Cuando un ejército se sitúa en bloque al lado de la legalidad, no hay revolución que triunfe, como ya había visto Engels a finales del siglo XIX y como había argumentado la socialdemocracia alemana para justificar a principios del XX su nueva definición como partido revolucionario que no hace la revolución. Lo contrario también es verdad: cuando un ejército es unánime en su decisión de dar un golpe de Estado, no hay constitución ni pueblo en armas que resista, como para su perdición comprobó el gobierno de Chile en 1973. Lo que abre las puertas a la indeterminación es el golpe faccioso, el perpetrado por una facción del ejército. Pues, por una parte, los golpistas no cuentan con el seguimiento de la totalidad de las fuerzas armadas y habrán de liquidar violentamente como primera providencia a los que mantienen la lealtad constitucional y disponen también de armas; y por otra, la división del ejército deja espacio suficiente para que grupos de civiles muy movilizados asalten depósitos de armas y comiencen a repartirlas entre los afiliados a organizaciones políticas y sindicales, que en momentos de gran movilización saldrán a la calle para hacer frente a los militares insurrectos. Esto fue lo ocurrido en julio de 1936: por su carácter faccional, el golpe no triunfó en su propósito de hacerse rápidamente con el poder, aunque por contar con amplias complicidades entre la joven oficialidad, no fue derrotado en su propósito de controlar vastos territorios de la península.

Todas las condiciones se acumularon así para que un golpe militar que no triunfa pero que no es derrotado, ejecutado en un momento de movilización obrera y debilidad gubernativa, pusiera en marcha una revolución que, aun si logró ahogarlo en las principales capitales, no fue capaz de derrotarlo en la totalidad del territorio ni pudo y ni siquiera se propuso hacerse con el control del

Estado. Esta acumulación de impotencias se debió más a las divisiones dentro de cada una de las partes en que apareció repartida territorialmente España que a la fuerza del adversario. Ni el ejército fue unánime en su propósito, ni las organizaciones obreras lo fueron en su estrategia ni en sus objetivos. Muchos militares y unidades de las fuerzas de seguridad permanecieron indecisos o fieles a la República: las primeras víctimas fusiladas por los rebeldes fueron sus propios compañeros de armas. Por el lado de los leales, los sindicatos venían empeñados de tiempo atrás en luchas internas por la hegemonía, mientras los partidos -socialista, comunista, republicanos-, aunque integrados en un frente electoral en enero de 1936, no habían podido formar un gobierno de coalición en febrero ni en mayo, tantas eran las diferencias que les separaban. Y así, cuando la rebelión hizo sonar la hora de la revolución, todos supieron qué destruir, a quiénes aniquilar; pero muy pocos sabían qué construir, qué recursos y hacia qué objetivos había que emplear la fuerza desatada por el golpe militar.

La rebelión que no triunfa, la revolución que carece de dirección y objetivos precisos, ambas cosas debidas a las profundas divisiones que recorrían por dentro a los que inmediatamente se constituyeron como dos bandos en guerra, impide definir la guerra de España de una vez por todas con alguna de los calificativos de uso común en los años treinta. Lo que ocurrió a partir de 1936 fue, desde luego, una lucha de clases por la armas, pero no fue en menor medida guerra de religión, de nacionalismos, guerra entre dictadura militar y democracia republicana, entre revolución y contrarrevolución, guerra en la que por vez primera se enfrentó fascismo y comunismo. De ella se podría destacar su anacronismo, su inconfundible aire de guerra de otro tiempo, con tantos muertos en las cunetas como en las trincheras, con campesinos en alpargatas y fusil al hombro enfrentados a militares al mando de tropas mercenarias; pero también podría entenderse como prólogo de la guerra futura, guerra de tanques y aviones, de ciudades bombardeadas, con una coalición de democracias y comunismo enfrentada a las potencias fascistas, anuncio de los campos en que se dividiría Europa tres años después.

El caso fue que los limitados éxitos, o las limitadas derrotas, de la rebelión militar y de la revolución obrera, al originar una nueva e imprevista situación en la que nadie controló todo el poder, impusieron en ambos lados estrategias de coalición de fuerzas y búsqueda de apoyos sociales. La expectativa de instauración de una dictadura militar acariciada por los conspiradores se vio profundamente modificada por el tipo de apoyos recibido, entre los que destacó muy pronto el de la jerarquía de la Iglesia y la casi totalidad del mundo católico, muy impregnado, sobre todo en sus juventudes, de la nueva ideología fascista. Por su parte, la expectativa de revolución social como respuesta a un golpe de la derecha, alimentada por los sindicatos, se vio a su vez afectada por la necesidad de librar una guerra en la que no se podía prescindir de ningún apoyo procedente de las clases medias y la reducida burguesía republicana y que reivindicó enseguida un contenido popular y antifascista por encima del de clase, una defensa de la legalidad republicana por encima de una acción revolucionaria.

La indeterminación del resultado -de la rebelión como de la revolución- y la necesidad de alianzas dieron a la guerra contenidos muy diversos según los territorios de que se trate, el tiempo que se considere y las instituciones y las organizaciones sindicales y políticas implicadas en el ataque o la defensa de la

República. En Andalucía y Extremadura fue patente la inmediata alianza entre los mandos del ejército expedicionario y los propietarios agrícolas para la represión de la clase obrera y del campesinado. Es imborrable entre las primeras imágenes de la guerra la de agricultores azuzando a militares y guardias civiles para rematar a campesinos tumbados boca abajo en las plazas de los pueblos; la de sanguinarios militares dispuestos a exterminar en masa a dirigentes, afiliados o simples simpatizantes de los sindicatos y partidos de izquierda después de encerrarlos como al ganado en las plazas de toros; la de milicianos y miembros de los diversos comités de defensa haciendo prisioneros a burgueses, propietarios, terratenientes y curas para fusilarlos de forma sumaria. Los pueblos de Baena o Palma del Río, en Córdoba, son paradigma de esta extrema situación en la que el ejército rebelde, que logra liberar a fuerzas de seguridad y a civiles sitiados, procede a la matanza indiscriminada de campesinos y familiares -sin reparar en mujeres embarazadas o niños de corta edad- y estos, por su parte, responden con la misma moneda a los rehenes que tienen en sus manos, sin reparar tampoco en sexo y edad de sus prisioneros.

La furia exterminadora de esa coalición militar/agraria, asistida por la Iglesia y por una Falange que hincha sus rangos con recién llegados dispuestos a realizar tareas de limpieza en la retaguardia, alcanzó también a los miembros de las clases medias urbanas de lealtad republicana, como puso de manifiesto la represión de autoridades y afiliados de partidos de izquierda en las capitales andaluzas. Pero, sin salir de los territorios rápidamente controlados por los rebeldes, el carácter de la guerra en Navarra, donde predominaba la pequeña y mediana propiedad aunque no escaseara la antigua nobleza, guarda poco parecido con el de Andalucía. En Navarra, los sublevados obtuvieron desde las primeras horas un masivo apoyo popular: allí no fueron sólo ni principalmente terratenientes latifundistas quienes asistieron a los militares, sino pequeños y medianos propietarios, que habían alimentado durante un siglo las filas carlistas. Mientras por Extremadura subía un ejército colonial y mercenario que aterrorizaba a la población civil, en Navarra y Álava los sublevados pudieron presumir del carácter "nacional" de su alzamiento, pues allí surgió espontánea la adhesión de un numeroso contingente de grupos de civiles en armas.

Las situaciones singulares abundaron también en los territorios de la zona leal a la República. En Cataluña, lo característico fue la revolución social protagonizada por la CNT, que procedió a la colectivización de la industria mientras respetaba, si no el fruto, al menos la propiedad de la tierra, dejada en manos de pequeños y medianos propietarios. La CNT y la FAI, de pronto dueñas "del todo", como decía García Oliver, no extendieron su dominio de la calle hasta el palacio de la Generalitat: una revolución social muy avanzada en las ciudades, sobre una base rural apenas modificada y un gobierno "burgués" al que se permitió subsistir, mientras los burgueses de verdad ponían tierra por medio si no querían caer asesinados y la Iglesia sufría la peor hecatombe de su historia: nosotros hemos resuelto la cuestión religiosa, proclamaba Andreu Nin: hemos suprimido los sacerdotes, las iglesias y el culto.

En Aragón, las columnas de milicianos impusieron una colectivización de la tierra contra la voluntad de una clase de pequeños y medianos propietarios y establecieron un órgano de poder político -el Consejo de Aragón- al margen de la legalidad republicana, mientras en extensas zonas de Castilla, Valencia y Andalucía se produjo una colectivización de la tierra por los sindicatos de

campesinos jornaleros que ocuparon las fincas abandonadas por sus propietarios y el poder político local pasó a manos de comités conjuntos de sindicatos y partidos del Frente popular. Ni que decir tiene que el País Vasco constituye otro caso singular, pues allí no ocurrió ninguna revolución social y, una vez aprobado el Estatuto, el PNV se mantuvo hasta junio de 1937 al frente de un gobierno autónomo con poder sobre poco más que el territorio de Vizcaya. Su máximo dirigente, José Antonio Aguirre, reunía varias de las cualidades que le habrían llevado al paredón en otros territorios de la República: era católico, ingeniero e industrial. En Bilbao, sin embargo, durante las primeras semanas de guerra, las iglesias estaban llenas a rebosar, como en Pamplona, y los católicos que a ellas asistían y los curas que en ellas celebraban misas podía ser fusilados, como así ocurrió, por otros católicos, vascos también, y vasco-navarros, bendecidos por otros curas, que luchaban por la defensa de la civilización cristiana contra la hidra marxista.

La variedad de situaciones originadas por la rebelión y la revolución conduce al tercer fenómeno imprescindible para entender una guerra con tantas víctimas lejos de los frentes: el hundimiento del Estado. No quedaba Estado, obviamente, en la zona bajo control de los insurgentes, cuyo objetivo no consistió en sustituir un gobierno por otro, como pudo haber sido en 1923, sino en liquidar la República e inaugurar un "Estado fuerte disciplinado", una dictadura militar. Hasta que Franco no fue nombrado jefe del gobierno del Estado, los rebeldes no dispusieron de unidad de mando y cada uno de los jefes de la rebelión actuó con autonomía en los territorios bajo su control. Luego, una vez elegido por sus compañeros de rebelión y de armas, Franco pasó a denominarse jefe del Estado, aunque todo lo que hubiera entonces no pasaba del "Estado campamental" que Serrano Suñer pugnó por convertir en Estado fascista. Pero tampoco había Estado en la zona leal, a pesar de la permanencia de los republicanos al frente del gobierno y de la continuidad de la presidencia de la República en la persona de su legítimo titular legítimo. No que la República quedara liquidada, sino que su gobierno carecía de los recursos necesarios para imponer su poder, que se dispersó entre las manos de los comités sindicales creados sobre la marcha para realizar las funciones propias de administración local. Sólo lentamente, y tras levantar de la nada un ejército, pudo la República recomponer un Estado cuando ya había perdido definitivamente el control sobre más de la mitad de lo que había sido su territorio.

GUERRA CONTRA EL INVASOR

El designio de construir un nuevo Estado, o de reconstruir el hundido, a partir de esa situación de fragmentación social y política, originó sendos discursos de guerra con la común característica de exaltar la unidad del propio bando y negar al enemigo su cualidad de español. Los militares no se habían preocupado de elaborar un discurso que legitimara su acción: se limitaron a observar que el gobierno había caído prisionero de organizaciones revolucionarias, de sectas y sindicatos que recibían inspiraciones del extranjero, a consecuencia de lo cual España vivía en una "situación caótica, que no existe otro medio de evitar que mediante la acción violenta". En aquellos momentos trágicos, escribía el general Emilio Mola, los patriotas se habían impuesto "la obligación de salvar a la patria" y debían forzosamente "organizarse para la rebeldía". Sus instrucciones, en lo que a legitimación de la conspiración se refería, no iban mucho más allá; patria en peligro, organización

para la rebeldía, recurso a la violencia, con el fin de instaurar una "Dictadura militar que tenga por misión inmediata restablecer el orden público, imponer el imperio de la ley y reforzar convenientemente al Ejército, para consolidar la situación de hecho, que pasará a ser de derecho".

Como ese paso tardaba en darse, la jerarquía de la Iglesia católica se encargó de presentar al mundo la guerra civil bajo la luz proyectada por el trágico y fatal enfrentamiento de las dos ciudades de San Agustín. Los obispos interpretaron la guerra como una conmoción tremenda, producto de dos ideologías irreconciliables, una española, que encarnaba el espíritu nacional; otra extranjera, inoculada desde fuera en la vida del Estado. "Al apuntar la *revolución* ha suscitado la *contrarrevolución*, y ellas son las que hoy están en lucha épica en nuestra España", escribió el obispo de Salamanca, Enrique Pla y Daniel, pronto llamado a más altos destinos. Y el cardenal Isidro Gomá, arzobispo de Toledo y primado de España, evocará, en una carta titulada "El sentido cristiano español de la guerra", el dolor que le producía haber visto "el territorio nacional mancillado por la presencia de una raza forastera, víctima e instrumento a la vez de esa otra raza que lleva en sus entrañas el odio inmortal a nuestro Señor Jesucristo". La única nación española, racial y auténtica, madre de naciones, contra una España extranjera, que no era en verdad España: en estos términos comenzó a recitar la Iglesia la historia de las dos Españas. Fuese el virus del liberalismo inoculado desde Francia, como temía el obispo de Salamanca, o el comunismo infiltrado de Rusia, como afirmaba la Carta Colectiva del Episcopado, la consecuencia era idéntica: no existía posibilidad alguna de pacificación. La guerra civil devino así "guerra de principios, de doctrinas, de un concepto de la vida y del hecho social contra otro, de una civilización contra otra", una cruzada, una obra de redención, y la sangre derramada era como sangre de mártires, el tributo necesario para hallar el camino de la resurrección. Al no poder terminar más que con la victoria de la cruz, la guerra se presentó como necesaria en su origen; hasta tal punto lo fue que se tendrá como un designio de la providencia.

Pero el discurso de la guerra civil como lucha a muerte entre una España racial y otra importada no fue una exclusiva de los insurgentes y sus aliados. En la zona leal a la República, los primeros resultados de la revolución del verano de 1936 fueron nefastos para la marcha de la guerra. Muy pronto, hasta los dirigentes más decididamente anarquistas de la CNT comprendieron que no bastaba con destruir; que era preciso construir. El lenguaje de la revolución cedió a partir del otoño ante la necesidad de definir estrategias políticas unitarias con las que hacer frente al imparable avance de los rebeldes. ¿Y qué podría unir a los "camaradas de todas las tendencias, republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas" sino el "espíritu indómito de la raza", celebrado por Federica Montseny? La unidad del pueblo en lucha apareció, en el discurso al menos, como el mejor disolvente de las diferencias entre organizaciones que hasta días antes del comienzo de la guerra abundaban en enfrentamientos y conflictos.

En aras de la reconstrucción de esa unidad superior, la unidad del pueblo antifascista, cada cual tuvo que sacrificar los objetivos inmediatos de su propia organización. Los dirigentes de la CNT, sobre todo los de tradición más anarquista que sindicalista, atribuirán el triunfo sobre la rebelión al pueblo en armas, a su capacidad de lucha, de resistencia al fascismo, a la "unidad racial contra el invasor". Hay un "parentesco racial" y una identidad esencial entre el

"esfuerzo de un Viriato y un Durruti acaudillando a una masa entusiasta" que se transforma por la acción en "un pueblo con un solo pensamiento, una sola voluntad, un solo brazo". Es la "unidad nacional contra el invasor extranjero" lo que permite definir la lucha como "guerra antifascista que debe asegurar la independencia del país" o como "magnífico movimiento popular contra la asonada fascista, heroica lucha que prosigue aún enfrentándose el ejército del pueblo y las hordas que han invadido el suelo ibérico".

Por supuesto, el forjador de la consigna de ganar la guerra fue el PCE y en su propaganda y resoluciones será donde se presente con más nitidez la guerra civil como una guerra del pueblo contra el invasor. Fuertes con el apoyo de la URSS y la llegada de las Brigadas Internacionales a la República, los comunistas definieron en los primeros momentos la guerra civil como una guerra popular contra la sublevación militar fascista. En el lenguaje comunista, lo militar fascista designaba una coalición de Ejército, Iglesia y Guardia civil, como fuerzas represoras del pueblo, y de gran capital y grandes terratenientes como fuerzas explotadoras del trabajador. Esa era la España facciosa contra la que luchaba el pueblo antifascista. Pero la aviación alemana y los ejércitos italianos hicieron acto de presencia, la lucha del pueblo español contra la rebelión militar/fascista se transformó en lucha contra el invasor extranjero y por la independencia nacional. Nuestra lucha, decía Dolores Ibarruri en una alocución dirigida al pueblo argentino, "que en los primeros días del movimiento pudo calificarse de guerra civil perdió pronto este carácter para transformarse rápidamente en guerra de independencia. Quieren someternos, esclavizarnos, pero no será. El alma de España, de nuestra España, de la España popular se ha forjado indomable y grandiosa a través de los siglos". Las mujeres de Sagunto, de Numancia, de los Comuneros de Castilla, de los agermanados de Valencia y de Mallorca, de los payeses de Cataluña, las Agustina de Aragón, María Pita, María Pineda, volvían a vivir en las Aída Lafuente, las Lina Odena, las mujeres de Asturias, las mujeres de Madrid. "El carácter y contenido de la guerra impuesta al pueblo español son de tal naturaleza que de una guerra de defensa de nuestro pueblo contra la rebelión militar de los oficiales fascistas y traidores a su patria, se ha transformado en una guerra de independencia nacional contra la invasión militar colonizadora del imperialismo fascista de Alemania e Italia", establecía la resolución aprobada por el pleno del partido reunido en marzo de 1937".

Si la coalición de militares, católicos y fascistas armó su discurso sobre la verdadera y eterna Nación española y calificó de inmediato a su enemigo como la Anti-España que era preciso liquidar para el renacimiento de la España auténtica, la coalición de leales a la República se identificó de inmediato con el único y eterno Pueblo español, el que se había levantado contra el invasor romano y resistido contra el francés como mostraban los heroicos ejemplos de Viriato y Agustina de Aragón. Si no se diera un abuso cierto en todas las explicaciones sumarias, se podría decir que la guerra civil fue vivida, del lado de los rebeldes, como una lucha por la supervivencia de la Nación española frente a la invasión extranjera; una invasión de liberalismo para quienes se proponían limpiar la infección francesa, o de comunismo para quienes pretendían extirpar el virus ruso; del lado de los leales, era el Pueblo español el que resistía heroicamente por su independencia frente a una invasión fascista.

POLÍTICAS DE VENGANZA Y EXTERMINIO

Rebelión y revolución asistidas por sendos discursos de guerra contra el invasor pusieron en marcha dos maquinarias de exterminio. Los rebeldes, decía un personaje de *La velada en Benicarló*, pretendían restaurar el principio de autoridad atribuyéndose la potestad de disponer de la vida de los súbditos; se conducen como si discurriesen así: cuantas más gentes matemos, mayor será nuestra autoridad. Franco mismo, en los primeros días de la rebelión, había explicado a un periodista americano que no dudaría en fusilar a media de España si tal fuera el precio a pagar para pacificarla. Por el otro lado, -sigue diciendo el personaje de *La velada*- la ferocidad del odio parecía colorearse de un razonamiento vicioso: en todas las revoluciones hay crímenes; como ahora hay crímenes es que estamos en revolución. O más aún: a fuerza de crímenes habrá revolución. Quizá nada revele mejor el distinto engranaje que mueve a esas dos violencias que el ametrallamiento de cerca de dos mil trabajadores en la plaza de toros de Badajoz y la matanza de clérigos en la provincia de Lérida. Matar campesinos era la prueba irrefutable del restablecimiento del orden; matar curas demostraba que la revolución estaba en marcha y ningún poder sobre la tierra sería capaz de detenerla. No se trata de postular ningún paralelismo que iguale responsabilidades y reparta culpas, sino sencillamente de constatar un hecho: en la zona insurgente, la represión y la muerte tenían que ver con la construcción de un nuevo poder; en la leal, la represión y la muerte tenían que ver con el hundimiento de todo poder.

Azaña decía, por boca de sus personajes, que las matanzas de la zona controlada por los insurgentes obedecieron al designio de restaurar el principio de autoridad por el expeditivo procedimiento de aumentar el número de muertos; y que las de la zona leal fueron resultado de una revolución obrera sin objetivos precisos y que mataba como prueba irrefutable de su existencia. Se podría expresar lo mismo de otra manera: las ejecuciones y asesinatos cometidos en la zona rebelde obedecían a decisiones fríamente tomadas por unos mandos militares o por sus aliados civiles -carlistas, monárquicos, tradicionalistas, católicos, fascistas- que consideraron la muerte de sus enemigos, según ha señalado Gabriele Ranzato, como un fin en sí mismo, como un expediente necesario para construir el tipo de Estado que tenían en mente y que se fue definiendo en sus primeros momentos como una dictadura militar sostenida por la Iglesia católica como gran agencia legitimadora y Falange Española como partido único. Los asesinatos y ejecuciones en la zona leal fueron, por el contrario, resultado de la desaparición del Estado, del hundimiento de las normas, de una revolución profunda en lo social, muy frágil en lo político, protagonizada por dos grandes sindicatos incapaces de constituirse como segundo poder. Mientras en la zona rebelde todo se encaminaba a la construcción de un poder totalitario, único y altamente concentrado, en la zona leal lo que se produjo no fue la aparición de un segundo poder enfrentado al legítimamente constituido para desplazarlo y ocupar su lugar, sino una dispersión y atomización de poderes, que quedaron en manos de comités locales con muy limitada capacidad para entenderse y organizar acciones en planos superiores al municipio o al barrio. Tal sería la línea que dividió a las víctimas de una y otra zona y que tuvo su origen en la diferente naturaleza del sujeto que protagonizó la rebelión y el que emprendió la revolución: una facción militar decidida a imponer la disciplina por medio de una represión indiscriminada; dos sindicatos obreros incapaces de controlar desde una dirección centralizada la actividad de comités y grupos más o menos autónomos.

Recomponer la autoridad disponiendo de las vidas de los súbditos y culminar la revolución matando al enemigo: si se considera la fenomenología de las muertes violentas, de sus víctimas y de sus ejecutores se verá que el fusilamiento tras el remedo de juicio sumarísimo definió a la implacable máquina represora del incipiente nuevo Estado desde que los rebeldes iniciaron su reconstrucción hasta que dieron por terminada, muy avanzados los años cuarenta, la labor de limpieza, de depuración. Tratándose de un ejército que conquista posiciones, que entra en pueblos y ciudades defendidos por milicianos, los primeros momentos se caracterizaron por el desencadenamiento de una violencia vengadora ejecutada sobre el terreno: degüello, paseos, tiros en la sien a la vera de los caminos. Pero cuando se estabiliza el dominio, junto a los militares que juzgan y fusilan, quedando así para siempre vinculados por un pacto de sangre, aparecen los clérigos y los fascistas, movidos también como los militares por un ansia purificadora, por la urgencia de extirpar el virus que había alimentado a la Anti-España. Hasta que la proximidad del triunfo aliado en la Guerra Mundial puso fin a las ejecuciones, el fusilamiento de los derrotados continuó siendo un fin en sí mismo, una demostración de ese nuevo Estado militar, católico y fascista -con las luchas internas por el poder que se pueden suponer- en el que los enemigos sólo gozaban de un destino seguro: el exilio o la muerte.

En la República, sin embargo, las grandes matanzas ocurrieron como resultado del hundimiento del Estado y remitieron a medida que el Estado se reconstruía. No por eso las del periodo que va de julio de 1936 hasta los primeros meses de 1937 fueron menos vengadoras en su designio: la revolución se había soñado como destrucción de lo existente, como derrumbe de un mundo podrido y nuevo amanecer entre temblores de la madre naturaleza. Haber mostrado simpatías por la derecha, ser católico o propietario de un negocio, vestir bien, llevar sombrero, se convirtieron de pronto en motivos para morir; nadie se sintió seguro, ni siquiera los pacíficos universitarios de la Residencia de Estudiantes, en la madrileña colina de los chopos, al abrigo del tráfico y las pasiones de la urbe, que de pronto notaron transformada la mirada del servicio: las camareras, que hasta ayer les atendían solícitas y de buen humor, les miraban ahora con odio, como percibió enseguida José Moreno Villa. La simbología revolucionaria, impregnada de contenidos religiosos, con su lenguaje de redención por la muerte, giraba siempre en torno a la inevitable violencia que acompaña al alumbramiento del nuevo mundo, a la sangre que mana durante el parto y al fuego que limpia hasta reducir a cenizas el carcomido edificio destinado a desaparecer.

La obra destructora de la revolución a cargo de milicianos fue exaltada por los mismos dirigentes sindicales hasta que se volvió contra ellos y comenzaron a definirla como actos de pillaje y achacarla a grupos de incontrolados. Pero sus aliados comprendieron desde el principio el desastre que para la República significaba la acción de los grupos destructores del orden existente: "Si no están a sueldo de Franco, actúan como sus agentes", dijo de la FAI un nacionalista catalán, Manuel Carrasco i Formiguera, a sus interlocutores del Foreign Office cuando fue a proponerles una mediación que condujera a una paz separada para Cataluña. Por supuesto, de lo existente, lo más digno de destrucción, más que el dinero, más que los cuarteles de la guardia civil, más que los registros de la propiedad, era la Iglesia y todo lo sagrado. Los destrozos de la Iglesia en las zonas de la República alcanzaron tal magnitud y fueron acompañados de rituales tan sobrecogedores por su

crueledad que todavía hoy se debate sobre las causas de esa especie de furia iconoclasta: ira sagrada, la ha llamado Manuel Delgado, para acentuar su carácter también religioso, sus ritos blasfemos, y recordar que "se mató a miles de curas y fieles sólo porque lo eran".

Así, los tiempos de la muerte fueron distintos en las dos zonas: la que quedó bajo control de los rebeldes, mantuvo sus ejecuciones al ritmo en que incorporaba territorios al nuevo Estado y construía la nación: en Toledo la sangre de los milicianos degollados corría tan generosamente por las calles que llegó a formar charcos. "Primero tengo que crear la nación", dijo Franco a Roberto Farinacci, enviado especial de Mussolini en marzo de 1937, que se admiraba por esa "especie de competición para ver quién puede matar a más gente", si los rojos o los nacionales, y preguntaba al dictador por sus planes futuros. Del embajador Roberto Cantalupo y de los cónsules italianos proceden precisamente las noticias sobre el ritmo frenético de ejecuciones al compás de la caída de las capitales andaluzas, que no remitiría hasta llevar a miles de madrileños, una vez terminada la guerra, ante las tapias de los cementerios. En la República, el asedio a las ciudades, los bombardeos, el miedo y la ansiedad, la inminencia del ataque, la necesidad de huir, fueron motivo de sacas de cárceles y fusilamientos masivos, como la de cientos de presos tras los bombardeos de Bilbao y los más de dos mil llevados en autobuses a Paracuellos del Jarama. La reconstrucción del Estado desde mayo de 1937, con el desplazamiento de los dos grandes sindicatos por una coalición de partidos al frente del Gobierno, acabó con la acciones de los "incontrolados", aunque multiplicó la actividad de los servicios de información y la represión de quintacolumnistas, espías o agentes del enemigo, o acusados como tales, encerrados en checas y víctimas muchas veces de muertes atroces, de las que no se libraron algunos luchadores del propio bando, como fue el caso del mismo Andreu Nin, asesinado en manos de los servicios secretos comunistas.

NI MEDIACIÓN NI PERDÓN

Frente a las políticas de venganza y exterminio y a los concomitantes discursos de guerra contra el invasor, resultaron vanas las muy escasas voces, todas ellas del lado de la República o del exilio, que definieron la guerra como una catástrofe nacional o como una guerra entre hermanos, e inanes todos los intentos de promover políticas de mediación y paz. No que no se elaborasen planes para negociar la paz, sino que fueron inmediatamente ahogadas por la exigencia de la victoria frente al enemigo. El más temprano y persistente de esos intentos fue impulsado por Manuel Azaña, uno de los contados españoles que desde una posición de autoridad, aunque de tan escaso poder como la presidencia de una República socavada por la guerra y la revolución, elevó su voz para hablar "contra la política de exterminio y de venganza y de la necesidad de habituarse a vivir juntos".

Su plan de acabar la guerra por medio de una paz negociada partía del doble supuesto de la imposibilidad de una victoria republicana y de la convicción de que Francia y Gran Bretaña no podían permitir el triunfo de los rebeldes sostenidos por Italia y Alemania. Azaña no era tan iluso como para pensar que por motivos ideológicos o por razones de solidaridad con una democracia en peligro, Gran Bretaña y, sobre todo, Francia, geográfica, política y sentimentalmente más cercana, ayudarían a la República española. Los dos periodos de gobiernos por él presididos habían coincidido con la subida al

poder de coaliciones de izquierda en Francia: en 1932 el *cartel des gauches* y en 1936 el frente popular, en sintonía con lo que había ocurrido en España. Pero Azaña sabía bien que en la relación entre Estados cuentan los intereses, no las ideologías y ahora, con Mussolini enviando cuerpos de ejército e Hitler aviones y armas a los militares rebeldes, no esperaba que Léon Blum hiciera nada por motivos puramente ideológicos o humanitarios. No podía creer, sin embargo, que los gobiernos franceses contemplaran impasibles la posibilidad de un Estado aliado de Alemania e Italia a sus espaldas y mantuvieran la prohibición de venta de armas a la República, a la que asistía perfecto derecho de realizar compras en el mercado internacional. Si la República perdía la guerra civil, Gran Bretaña y Francia perderían la primera batalla de la segunda guerra mundial, pensaba Azaña.

Por estar convencido de que finalmente los gobiernos francés y británico reaccionarían ante el inminente peligro impidiendo que la República perdiera la guerra a manos de nazis y fascistas, Azaña se quedó en la presidencia aunque considerara una vana ilusión el triunfo de la República. La única salida honrosa exigía la mediación de las cinco potencias -Gran Bretaña, Francia, Unión Soviética, Alemania e Italia- para imponer una "suspensión de armas" con el pretexto de la evacuación de voluntarios y tropas extranjeras. La presencia de una delegación internacional capaz de garantizar el cumplimiento de esta especie de armisticio, el intercambio de prisioneros de ambas zonas, la reconstrucción de familias con la progresiva libertad de desplazamiento de una zona a otra y, en fin, la celebración en un lejano día y bajo supervisión internacional de un plebiscito sobre la forma de gobierno que los españoles quisieran darse, eran los sucesivos pasos del proyecto acariciado por Azaña. Eso fue lo que Julián Besteiro fue a proponer en su nombre a Anthony Eden, secretario del Foreign Office, con motivo de la coronación de Jorge VI y ese fue el encargo que insistentemente el presidente de la República transmitió al nuevo presidente de gobierno, Juan Negrín, desde mayo de 1937: reconstruir el Estado, levantar de la nada un ejército, resistir, garantizar el orden interno, pero no para el quimérico objetivo de ganar la guerra sino para forzar una paz negociada bajo los auspicios de las potencias implicadas en el asunto.

No era un plan tan descabellado como luego se ha supuesto, aunque el encargado de Negocios de Gran Bretaña, John Leche, siempre se mostrara escéptico ante unas propuestas que consideraba impracticables, tantos eran los odios acumulados y tanta la sangre derramada. Pero Madrid había resistido, los italianos acababan de sufrir la humillante derrota de Guadalajara y los frentes parecían estabilizados: había razones para esperar una salida negociada y así se había expresado el diputado conservador Winston Churchill en una intervención parlamentaria. Eden había llegado a principios de año a un "acuerdo entre caballeros" con los italianos y mantenía su política de atraer a Italia a un pacto global sobre el Mediterráneo que la alejara de Alemania. Tal vez por estas favorables circunstancias, prestó más atención de la acostumbrada al encargo de Azaña y aprovechó la presencia en Londres del enviado de Pio XI a la coronación de Jorge VI, el secretario de la Congregación de Asuntos eclesiásticos extraordinarios, Giuseppe Pizzardo, para preguntarle si Italia se uniría a una llamada conjunta de las potencias en favor de un armisticio. No interesa en este contexto el destino final de la iniciativa de Eden y el fracaso de su objetivo prioritario, empujar a Italia fuera de la órbita alemana; lo que importa es que el Vaticano, deseoso de no aparecer identificado en exceso con los gobiernos fascistas y de mantener relaciones de colaboración

con Francia y Gran Bretaña, acogió favorablemente el plan, juzgó que merecía la pena poner en marcha una iniciativa internacional con objeto de parar la guerra e intentó sondear a las autoridades nacionalistas la eventualidad de un armisticio.

La furia del gobierno de Franco ante semejante conato de traición fue inmediata. No por pura casualidad, el mismo día en que Eden mantenía su conversación con Pizzardo, el 10 de mayo de 1937, Franco recibía a Gomá, a quien había hecho llamar para rogarle que se difundiera en el extranjero un escrito colectivo del episcopado español "con el fin de desvirtuar la información falsa o tendenciosa que tanto daño ha hecho al buen nombre de España y de la Iglesia". Las autoridades insurgentes no comprendían las cautelas y vacilaciones del Vaticano para establecer plenas relaciones diplomáticas con el nuevo Estado ni su política contemporalizadora con los nacionalistas católicos del País Vasco y no ocultaban su irritación ante lo que consideraban un efecto de la propaganda roja: que se compartiera en la Secretaria de Estado la idea de que todos, blancos y rojos, eran lo mismo. Ya se comprende, en este clima, el efecto causado por la sugerencia de Pizzardo de que tal vez las insidiosas campañas de prensa del extranjero contra España y la Iglesia podrían quedar desarboladas si se llevaba a los prisioneros a campos de concentración para que los periodistas y los filántropos extranjeros pudieran verlos y comprobar su estado de salud. La remota posibilidad de que el Vaticano se incorporara a una iniciativa de las potencias para poner fin a la guerra por medio de un armisticio fue acogida con no disimulada irritación por el representante oficioso del gobierno de Burgos ante la Santa Sede, Antonio Magaz, y por el mismo Franco, que inmediatamente despachó a Gomá para que ilustrara a Pizzardo y al mundo católico sobre la verdadera naturaleza de la guerra y la imposibilidad de que acabara de otra forma que no fuera la victoria total, la rendición incondicional del enemigo.

Es lo que Gomá se encargó de transmitir a Pizzardo en una entrevista mantenida en Lourdes: la guerra no podía terminar más que con la victoria sin condiciones de la España nacional y católica. Los planes de mediación anglo-francesa inspirados por el presidente de la República estaban condenados al fracaso, como lo estaban también los presentados por quienes, desde París y con el apoyo del Comité por la paz civil y religiosa en España, se tenían por portavoces de una tercera España y mantenían estrecho contactos con el grupo de católicos franceses reunidos en torno a Jacques Maritain y Emmanuel Mounier. Salvador de Madariaga, que tanto recriminará a Azaña haber dejado pasar en noviembre de 1932 la ocasión de la visita del presidente del gobierno francés, Edouard Herriot, y no haber comprometido a la República en una alianza con Francia que ahora le hubiera obligado a acudir en su auxilio, no descansó en su empeño. Desde muy pronto, a comienzos de noviembre de 1936, comenzó a bombardear al Foreign Office, valiéndose de su relación personal con Anthony Eden, con propuestas más o menos fantasiosas de armisticio y formación de un gobierno provisional con políticos seleccionados de entre los más templados de ambas partes, invariablemente recibidas por los diplomáticos británicos con una idéntica ración de simpatía y escepticismo, pues los informes que recibían de cónsules y agentes en ambas zonas hablaban de odios inextinguibles, y porque el gobierno de Su Majestad tampoco estaba muy interesado en adentrarse por un camino que pudiera conducir al establecimiento de una república comunista en el Mediterráneo. Las matanzas de los primeros meses de guerra, además de mostrar a todo el mundo el

carácter sanguinario de los españoles, ponían en evidencia la falta de control de las autoridades de la República sobre su propio territorio y el peligro de una victoriosa revolución comunista. Mejor sería la comprobada política de esperar y ver, tomar buena nota de los intereses italianos en el Mediterráneo y ayudar en todas las gestiones humanitarias para las que fuera solicitada su presencia: al fin y al cabo, como el mismo Eden hizo saber al embajador de la República en Londres, Pablo de Azcárate, el único interés del gobierno británico consistía en hacer todo lo posible por salvar vidas y evitar sufrimientos al pueblo español.

La guerra acabaría, pues, sin mediación ni paz firmada y sin que pudiera contemplarse, como un siglo antes al finalizar la guerra entre absolutistas y liberales, "la alborozada visión de un campo de boinas, símbolo aquel día de la inolvidable reconciliación de los hermanos que se abrazaban después de seis años de encarnizada lucha". Ahora podía temerse lo peor, cuando en las últimas semanas de guerra Franco contestó invariablemente a británicos y franceses, que pretendían actuar como intermediarios en la rendición de la República para así contener la influencia alemana e italiana sobre el nuevo régimen, que no los necesitaba, que el "espíritu de generosidad" de los vencedores constituía la mejor garantía para los vencidos. Espíritu de generosidad que debió dejar helados a sus mismos aliados, pues si las matanzas del verano y el otoño de 1936 impresionan por su crueldad, las miles de ejecuciones realizadas después de su fin, y de las que paulatinamente se va conociendo la magnitud, sobrecogen por su falta de piedad y por la ausencia de otro propósito que no fuera consolidar el régimen por medio del terror. La guerra se había declarado contra el comunismo y era preciso extirpar el mal de raíz para liquidar cualquier posible vuelta a las andadas. La consideración del enemigo como extranjero, traidor, masón, rojo, comunista, siguió alimentando durante años la máquina represora. Ninguna duda, ninguna vacilación podía permitirse a este respecto.

Por eso, las tímidas voces que se alzaron para proponer, en los meses siguientes a la victoria de Franco, una consideración del enemigo como hermano -hermano culpable, desde luego, pero hermano al fin- fueron silenciadas sin contemplaciones. Y como en el caso de la mediación, también aquí una iniciativa aislada, de la que fue protagonista el mismo cardenal que recriminaba al Vaticano su ceguera para apreciar el verdadero carácter sagrado, de choque de civilizaciones, de la guerra, revela la naturaleza del vencedor. Pues fue el mismo Isidro Gomá que había presentado el caso de España como una guerra sostenida por el espíritu cristiano contra el materialismo marxista, quien en agosto de 1939, sin renunciar a ninguna de las afirmaciones anteriores y tras protagonizar una insólita ceremonia en la que Franco fue investido como Caudillo, avisó que la paz no sería posible, "si todos los españoles no abrimos nuestros brazos de hermano para estrechar contra nuestro pecho a todos nuestros hermanos. Y lo somos todos, los de uno y otro lado". Ese era, por raro que parezca tratándose de eclesiásticos, un lenguaje nuevo, pues como también había observado Azaña en septiembre de 1937, después de tantos meses de guerra, nadie con autoridad en la jerarquía de la Iglesia había pronunciado "las palabras de paz, de caridad, de perdón que les corresponde decir, si de verdad su reino no es de este mundo". El papel de la Iglesia, aunque se creyese atacada con injusticia era muy otro, y nunca debió alentar a unos españoles contra otros, escribía Azaña, pero nadie con autoridad en la Iglesia habló ese lenguaje hasta que, una vez terminada con la victoria, la visión del derrotado como hermano planteó una exigencia nueva: "Tenemos el

deber de perdonar y de amar a los que han sido nuestros enemigos", escribía ahora el cardenal; más aún, la grandeza de la patria, por todos querida, no se logrará "sino en la medida en que se logre el espíritu de concordia y el sentido de unidad: los rencores entre los ciudadanos son el mayor corrosivo del patriotismo". Gomá no dudaba incluso en tocar el alma de sus diocesanos recordándoles que los deudos a quienes lloraban murieron perdonando a sus matadores.

Fue esta una pastoral que levantó algo más que suspicacias en los círculos dirigentes del régimen. Lo que pretendía el cardenal Gomá, muy preocupado por el creciente papel de lo que algunos obispos comenzaban a denominar "la canalla", o sea, Falange, era exhortar a la construcción de un Estado católico en el que el influjo fascista quedara contenido por la activa participación de los católicos en la vida pública: pretendía reconstruir la nación y el Estado católicos limitando la avasalladora penetración de Falange. En ese contexto, erigir a la Iglesia en instrumento de pacificación significaba reclamar para ella el papel de restauradora de la paz. No estaban, sin embargo, en 1939 las cosas todavía maduras para atribuir a la Iglesia el papel hegemónico en la construcción del nuevo Estado. Ante todo, los católicos que escribían sin distinción de fe religiosa y militancia política -los católicos que se habían vuelto fascistas y los fascistas que habían integrado la religión católica en su ideario- abundaban en la hora de los alemanes. Y Serrano Suñer, que procedente de las Juventudes de Acción Popular era de los católicos fascistizados de pies a cabeza, soñaba con un Estado totalitario a la manera alemana. Al cardenal Gomá, que había intentado desplazar la raya del poder de la Iglesia unos metros más adelante de lo que Falange estaba dispuesta a aceptar, le prohibieron propagar sus recomendaciones y le obligaron a guardar para mejor ocasión sus pastorales anhelos de fraternización. Nadie, por lo demás, en la Iglesia manifestó públicamente su desazón por la expeditiva limpieza de los derrotados.

Era preciso, desde luego, acabar con los odios, dijo Franco como en respuesta al cardenal en su primera alocución de fin de año, el 31 de diciembre de 1939, pero este perdón no debía hacerse a la manera liberal, "con amnistías monstruosas y funestas". Campos de concentración, cárceles hacinadas, batallones disciplinarios de soldados trabajadores, colonias penitenciarias militarizadas, depuraciones de funcionarios y empleados fueron los destinos en que acabaron los derrotados a los que se aplicó alguna de las nuevas leyes decretadas por los vencedores: la de Responsabilidades Políticas, de febrero de 1939; la de Represión de la Masonería y el Comunismo, de marzo de 1940. Pero otros muchos que habían actuado en "defensa del antiguo orden jurídico", o sea, de la República, fueron sometidos durante años a consejos de guerra sumarísimos y condenados por el delito de "adhesión a la rebelión militar". Todavía en 1944 el Consejo Supremo de Justicia Militar dictó 120 sentencias por este supuesto delito tipificado en un decreto de la Junta de Defensa Nacional del mes de julio de 1936 que sirvió a los rebeldes para condenar a muerte por rebelión militar a quienes se habían mantenido leales a la legalidad republicana. Mientras la solidaridad de España con los países del Eje la llevaba a pasar de su benévola neutralidad a la no beligerancia, las ejecuciones de los hallados culpables del fantástico delito de adhesión a la rebelión militar continuaron a buen ritmo. La hora cumbre de la Iglesia habría de esperar todavía unos años, aunque cuando llegó, en 1945, se pudo ver hasta dónde estaba dispuesto el régimen a tratar con piedad a los vencidos: una profusa

legislación de indultos iniciada en octubre de ese año no culminará hasta 1969, treinta años después de la victoria, declarando prescritos los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939.

GUERRA FRATRICIDA

Era, por tanto, inútil esperar del Estado o de la nación creados por Franco una nueva mirada sobre la guerra civil. Como ha señalado Paloma Aguilar, el régimen siempre hizo ostentación de su victoria y siempre mantuvo un discurso oficial sobre la guerra valiéndose de la construcción de lugares de la memoria colectiva, de medidas coactivas o de disposiciones sobre contenidos de la enseñanza. Monumentos, desfiles, rotulación de calles, fiestas cívico-religiosas, libros de texto, noticiarios documentales, constituyeron perennes recordatorios de la guerra como fuente de legitimación de los vencedores. La rebelión militar permaneció para siempre fiesta del 18 de julio, día del glorioso alzamiento nacional; el 1 de octubre sirvió de perenne recordatorio de la exaltación de Franco a la Jefatura del Estado; el devenir de la guerra siempre se recitó como triunfo de la Cruzada. Alzamiento, exaltación, triunfo de la cruz que venían a sellar, un año tras otro, el pacto sobre el que se fundaba la católica nación española. Nada de eso dejó de tener vigencia en el discurso oficial hasta la desaparición del creador de tal nación, aunque con el correr de los años fuera reduciéndose por los efectos de las inexorables leyes biológicas el contingente de quienes comulgaban con semejantes historias.

Frente a esa avalancha de adoctrinamiento y de lugares y conmemoraciones de la memoria impuesta, los perdedores solo podían oponer el silencio: entre los derrotados, de la guerra no se hablaba, de la represión sufrida por parientes cercanos no se decía nada. Ni siquiera entre compañeros de estudios era habitual un grado de confianza que permitiera hablar de familiares muertos o represaliados, como pudo comprobar Carlos Castilla del Pino cuando ingresó en la Universidad de Madrid. Hasta que la suerte de la Guerra Mundial no comenzó a inclinarse del lado de los aliados, no fue posible hablar del pasado más que en los términos codificados por los vencedores. Quienes no podían hacerlo en esos términos, se callaron. Pero a medida que los ejércitos aliados avanzaban, renació en los acosados grupos de oposición, y surgió entre los reducidos grupos de monárquicos que comenzaban a enfrentarse a los falangistas, la esperanza de que a Franco y su régimen le aguardara la misma suerte que a Hitler, a Mussolini y a los suyos. Con la liberación de Italia era impensable que España pudiera seguir bajo el dominio franquista. Eso fue, al menos, lo que entendieron los grupos de oposición que formaron la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, en la que se encontraron dialogando militantes de la CNT y de las organizaciones socialistas con monárquicos que pretendían una pronta restauración.

Fue en esos contactos entre pequeños grupos de la oposición interior procedentes de los dos bandos de la guerra civil cuando por primera vez se comenzó a hablar de lo que sería necesario hacer para garantizar una transición pacífica hacia un sistema aceptado por todos los españoles. Se habló de un gobierno o una junta provisional que se hiciera cargo del mantenimiento del orden hasta la convocatoria de un plebiscito, de disolver Falange, de conceder cierta primacía a la Iglesia católica, de restituir sus bienes y su legalidad a los partidos y sindicatos, y se habló de una amnistía inmediata y total. La nota tripartita, firmada por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia y,

más adelante, la resolución de las Naciones Unidas parecían empujar en el mismo sentido: en España debía instaurarse un gobierno nuevo y aceptable, cuya autoridad emanase del consentimiento de los gobernados, que se comprometiera a respetar la libertad de palabra, de culto y de reunión y que estuviera dispuesto a efectuar prontamente elecciones en las que el pueblo español pudiera expresar su voluntad. No hay más camino que ese, dirá el socialista Indalecio Prieto, ante el congreso de su partido reunido en Toulouse en junio de 1947: gobierno provisional, amnistía, restablecimiento de libertades y que el pueblo español diga cual es el régimen de gobierno que desea.

Que el restablecimiento de las libertades exigía como medida previa una amplia amnistía de lo ocurrido durante la guerra civil se convirtió a partir de entonces y para siempre en elemento indiscutible de todas las conversaciones y acuerdos de la oposición del exilio y del interior. Su primera expresión formal tuvo lugar en agosto de 1948, cuando una delegación del Partido Socialista en el exilio llegaba en San Juan de Luz a un acuerdo con representantes de la Confederación Española de Fuerzas Monárquicas sobre un programa de ocho puntos que establecía los pasos para una transición pacífica de la dictadura franquista a una plena democracia. Entre la caída del general Franco y la consulta que habría de determinar la futura forma de Estado, monárquicos y socialistas contemplaban dos medidas fundamentales: dictar una amplia amnistía de delitos políticos e impedir todo género de venganzas y represalias por motivos religiosos, sociales o políticos. Españoles que habían financiado la conspiración contra la República y tomado parte activa en la defensa de la rebelión, como era el caso de José María Gil Robles y de su partido Acción Popular, y españoles que habían combatido contra la rebelión y por la República, como era el de Indalecio Prieto y del PSOE, no imaginaban una restauración de la democracia sin un acuerdo entre los enemigos de ayer: la amnistía general de los derrotados y la decisión de no exigir venganzas ni represalias constituían los dos requisitos previos para construir sobre las ruinas de la guerra una nueva convivencia nacional.

Desde mediados de los años cuarenta hubo, pues, españoles procedentes de lo que habían sido bandos enfrentados en la guerra civil que comenzaron a hablar y a firmar pactos sobre una futura transición a la democracia. Imaginar ese proceso exigía romper la visión excluyente del pasado, abandonar el lenguaje de la guerra contra el invasor, dejar de exaltarla como "heroica lucha del pueblo contra las hordas que han invadido el suelo ibérico" o de celebrarla como cruzada emprendida en nombre de Dios por "haber visto el territorio nacional mancillado por la presencia de una raza forastera". Manuel Azaña -que fue el más lúcido observador de los hechos y el más penetrante de sus analistas- había sido de los primeros en definir la guerra como "una calamidad nacional" y en rechazar como inevitable la política de "exterminio del adversario". También lo fue en pensar que la reconstrucción de España "tendrá que ser obra de la colmena española en su conjunto, cuando reine la paz, una paz nacional, una paz de hombres libres, para hombres libres". Eso mismo era lo que decían ahora los que, dentro y fuera de España, se oponían a la permanencia de la dictadura.

En 1937, convencido de que no quedaban energías suficientes para este tipo de política, Azaña no veía la posibilidad de que los españoles dejaran las armas si no eran obligados por mediadores extranjeros que garantizaran la retirada de extranjeros y la concesión de una amnistía general por ambos

bandos. Diez años después, cuando monárquicos de la oposición y socialistas del exilio comenzaron a referirse también a la guerra como una "lucha brutal, salvaje, inconcebible", no pudieron hacer otra cosa diferente a lo que había intentado Azaña: proponer una amnistía, desechar cualquier plan de venganza y buscar una mediación extranjera. Como Azaña, también los negociadores de 1948 pensaban que los españoles eran por sí mismos incapaces de avanzar en un proceso de paz; que, por tanto, era necesaria una mediación como fase previa a la transición. Y como Azaña, también la oposición a la dictadura esperó la acción de Gran Bretaña y el impulso de Francia, que había considerado una afrenta el fusilamiento por Franco de Cristino García, un héroe de la Resistencia, y de sus compañeros.

Pero si 1948 fue el año en que por vez primera españoles que habían combatido acordaron un camino de transición a la democracia que implicaba enterrar los discursos de guerra contra el invasor, fue también el año en que se hizo evidente que jamás se produciría una presión exterior suficiente para derrocar a Franco. La diplomacia británica, cuya política constante desde el otoño de 1936 había sido el abandono de la República a su suerte, siguió a la de Estados Unidos en su giro hacia la guerra fría: aunque arreciara la represión y se sumaran nuevas víctimas a los miles de fusilados durante la guerra y la inmediata posguerra, Franco no sería molestado. Allá los españoles sí, como decía su jefe del Estado, el liberalismo era "una degeneración del ser español" y si la democracia atentaba directamente "contra el ser de España". España se definía como nación en cuanto había sido capaz de borrar de su historia el nefando siglo XIX, de erradicar el liberalismo, enterrar la democracia y retornar a la gran tradición católico imperial.

Así quedaban claras, desde finales de los años cuarenta dos lecciones: primera, que Franco podía mantener inalterado su discurso de la guerra victoriosa contra la anti-España en la seguridad de que las potencias democráticas no cumplirían ningún papel en la restauración de la democracia; segunda y complementaria, que si la democracia volvía alguna vez a España, sería porque así lo hubieran decidido los españoles mismos, pues las potencias democráticas habían mostrado fehacientemente que nada les importaba una diferencia española en el confín norte de África. Alguien tan poco sospechoso de inclinaciones fascistas como Gerald Brenan escribió en 1950 que España necesitaba vivir por algún tiempo bajo un régimen autoritario, lo cual no debía desalentar a los ingleses a emprender un viaje por España, ya que los hoteles eran excelentes, los precios razonables y la singular mezcla de culturas de Europa, Asia y África del Norte ofrecía a los europeos en busca de nuevas sensaciones muy buenas razones para venir por aquí. Si esto lo escribía Brenan, ya se puede suponer lo que importaba en las cancillerías europeas la permanencia de los españoles bajo un "régimen autoritario". La convicción de haber sido abandonados, de haber perdido definitivamente la guerra, dominó todos los medios del exilio y cayó como una losa sobre la oposición interior, diezmada de nuevo por un terror que no retrocedía siquiera ante la comisión de crímenes tan atroces como el del "Pozu Fumeres".

La persistencia de un régimen legitimado por una guerra y la indiferencia de las democracias alentaron las amargas reflexiones sobre la guerra civil como tragedia, las búsquedas de la culpa colectiva en alguna anómala constitución del ser de España, en su enigma o en su razón histórica; los balbuceos, también entre los intelectuales católicos, de una nueva actitud sobre

la experiencia de la guerra, que José L. López Aranguren resumió en 1953 reconociendo que todos se sentían envueltos "en esa realidad humana, fratricida, brutal" que era la guerra; todos, añadía, "aunque tratemos de olvidarlo, somos protagonistas y responsables de la tragedia". La larga permanencia de Franco en el poder permitió además la llegada a la vida pública de una nueva generación que, si había vivido la guerra, no la había hecho y no se sentía bloqueada por ninguna especie de culpa colectiva; los que conocieron como remoto recuerdo de la infancia los años finales de la República adoptaron el lenguaje de los ya por entonces descorazonados mayores del exilio y de la oposición interior y comenzaron a definir la guerra como una "inútil matanza fratricida". Eran unos jóvenes dispuestos a emborronar y difuminar la escisión entre vencedores y vencidos trazada con el triunfo de unos y la derrota de los otros en la República. No se trata sólo de que los hijos de los vociferantes vencedores asumieran los valores defendidos por los silenciosos vencidos, aunque mucho de esto hubo; sino de algo más decisivo: de que la línea divisoria de la política española no pasará a partir de 1956 entre las derechas y las izquierdas enfrentadas durante la guerra sino entre quienes apoyaban la dictadura como realización de la única nación española y quienes no veían ninguna España posible si no era capaz de superar la escisión provocada por la guerra civil.

Febrero de 1956 marcó, con la movilización de estudiantes universitarios, la aparición de esa nueva generación. Por vez primera, un manifiesto contra el régimen había circulado con el apoyo de comunistas, monárquicos y falangistas disidentes, todos ellos capturados por la policía y llevados a la cárcel. Un grupo de jóvenes socialistas cayó también semanas después en manos de la policía por distribuir un manifiesto escrito por "nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos", el 1 de Abril, "día fundacional de un régimen que no ha sido capaz de integrarnos en una tradición auténtica, de proyectarnos a un porvenir común, de reconciliarnos con España y con nosotros mismos...". Si los hijos de las familias del régimen se habían alejado de los valores defendidos por su padres, si un puñado de relevantes falangistas se encaminaba del fascismo a la democracia, el mundo católico, más complejo y diverso a medida que la guerra se asentaba en el recuerdo, comenzaba también a sufrir profundas sacudidas que llegaron a afectar a viejos dirigentes de la CEDA, como Gil Robles y Giménez Fernández. Y si los jóvenes socialistas habían repudiado en su afirmación de principios, "los odios sangrientos del pasado", los jóvenes de la Unión Demócrata Cristiana, fundada también en 1956, juzgaban la guerra como "una tragedia, una catástrofe que era preciso arrojar al olvido". Joaquín Satrústegui, un político monárquico, resumía poco después el nuevo estado de espíritu diciendo que "una guerra civil es una inmensa tragedia sobre la que no cabe fundar el porvenir".

POLÍTICAS DE OLVIDO Y RECONCILIACIÓN

Lo que todo esto indica es que en 1956 había surgido una generación nueva, formada por gentes que no habían hecho la guerra civil, "exenta de responsabilidad en la guerra fratricida", como la saludará *El Socialista*, y que pretendía superar sus secuelas inventando un nuevo relato de la guerra como tragedia inútil. Tal vez no lo hubieran logrado si entre los mayores nadie hubiera hablado hasta entonces de amnistía. Pero a diferencia de sus mayores, la nueva generación pudo completar la nueva mirada sobre la guerra porque fue la primera en no esperar nada de mediaciones o intervenciones extranjeras: los

embajadores habían regresado hacía años, Estados Unidos había firmado su pacto de amistad y cooperación con el régimen de Franco y España había ingresado en las Naciones Unidas. "El sabor amargo y el asco de haber sido defraudados y de la indiferencia de la intelligenztia internacional", evocado por Carlos Barral a propósito de los acuerdos del régimen de Franco con el Vaticano y Estados Unidos, se tradujo en la urgente necesidad de elaborar un nuevo discurso de la guerra, que la dio por clausurada y que acabó por transformarla de guerra contra el invasor en guerra fratricida, de la que no importaba tanto la culpa pasada como la reconciliación impuesta por el presente. La nueva cuestión que respecto a la liquidación de los efectos de la guerra se planteó entonces fue que nadie iba a venir para ejercer como mediador de una paz impuesta desde fuera. La generación de 1956 y los que vinieron detrás querían ser como los europeos pero debieron convencerse desde muy pronto de que los europeos no iban a mover ni un dedo para que fueran como ellos; que si lo que pretendían era llegar a una democracia como fundamento de una paz de hombres libres no quedaba más remedio que reconciliarse por su cuenta.

Así lo sentían y decían los nuevos grupos que salían a la superficie, procedentes algunos del mundo católico, antes unánime en su condena del liberalismo y el comunismo como causas de la guerra y ahora cada vez más inclinados a considerarla como una culpa colectiva, de la que nadie, tampoco la Iglesia, estaba exento. A partir de 1956 y de la retirada forzosa de la facción que más se había impregnado de fascismo en los años cuarenta y el avance de la autoritaria tradicionalista vestida con el ropaje de la modernización tecnocrática, o sea, a partir de la caída de los Ruiz Giménez y Laín y la irresistible ascensión de los López Rodó y Fernández de la Mora, el mundo católico no volvió a recomponer su túnica inconsútil de los tiempos de guerra. Hasta Calvo Serer empezó a pensar que tal vez aquella España, enfáticamente proclamada sin problema unos años antes, tendría alguna lección que aprender de "las nuevas democracias" occidentales. Los católicos fascistizados de otros tiempos echaron todos los puentes posibles a los intelectuales de la otra España, la del exilio interior y exterior, por ver si entre todos se reconstruía una tradición común en la que reconocerse. Diálogo fue la nueva actitud del espíritu donde antes sólo se hablaba de exclusión.

Los comunistas captaron rápidamente la situación y antes que ningún otro grupo cambiaron la estrategia oficial del partido con motivo de la crisis de dirección que lo sacudió en este mismo año de 1956. Cuando el antiguo responsable de orden público de la Junta de Defensa de Madrid, Santiago Carrillo, se hizo con la secretaría general del partido, proclamó de inmediato el fin de la guerra y enunció la nueva política de reconciliación nacional, que le permitía tender la mano en todas direcciones y, antes que nadie, a los socialistas y a los católicos. Era posible derribar a Franco, escribía Carrillo; bastaría para conseguirlo que "todas las fuerzas de derecha y de izquierda que se oponen al franquismo" llegaran a un acuerdo. Ya estaban fraternalmente unidos en las grandes huelgas, ya habían permanecido todos "juntos en las cárceles"; no quedaba más que unir las fuerzas para "derribar a Franco y derribarle pacíficamente". Mientras tanto, el congreso de su partido, publicaba un manifiesto "Por la reconciliación nacional de todos los españoles" en el que tras constatar que una nueva generación "que no ha vivido la guerra civil" comenzaba a desempeñar un papel en la sociedad española, declaraba "solemnemente estar dispuesto a contribuir sin reservas a la reconciliación

nacional de los españoles, a terminar con la división abierta por la guerra civil y mantenida por el general Franco".

La necesidad de alcanzar pactos de unidad de acción entre fuerzas de diverso origen y significado político se reveló así de nuevo como un factor determinante en la elaboración de los discursos de la guerra civil y de lo que era preciso hacer con su recuerdo. La guerra del pueblo o de la nación contra un invasor extranjero había reforzado en el plano ideológico la exigencia de un frente único contra el enemigo hasta conseguir el triunfo total, aunque fuera al precio de su liquidación; la guerra fratricida reforzó la convicción de que, contra Franco, no cabía ninguna exclusión, de que la dictadura se sostenía en apoyos tan sólidos y disponía de tanta fuerza que a nadie se le podía exigir, para engrosar las filas de la oposición, un previo certificado de su conducta durante los años de guerra. Ese fue el origen de la mirada de la guerra como una quiebra interna de la sociedad española, como una catástrofe o como una tragedia nacional, y de la política de olvido y reconciliación como paso previo al inicio de un proceso constituyente.

Es significativo que el nuevo discurso de la guerra y la exigencias políticas de reconciliación a él implícitas haya procedido de los derrotados. Seguramente, este hecho guarda alguna relación tanto con los orígenes y primeros meses de la guerra como con su catastrófico final. El silencio al que fueron condenados los que se quedaron dentro de España, el largo exilio de los que lograron escapar, favoreció un tipo de reflexión en el que las oportunidades perdidas, los errores cometidos, los abusos y desmanes que tuvieron que presenciar en la mayor impotencia, fueron llenando la conciencia de un sentimiento de culpa colectiva. Por otra parte, los exiliados eran conscientes de que sus divisiones internas habían contribuido de forma decisiva a la pérdida de la República que, para colmo, había terminado con una nueva guerra civil dentro de la guerra civil. Con estos sentimientos, la consideración de la guerra como fratricida y la salida de ella por medio de una amnistía general -de que nos amnistiáramos los unos a los otros, como había sido la recomendación de Juan Valera con motivo del desastre de 1898- constituyeron las etapas lógicas para formular una política con voces tomadas de mundos ajenos pero susceptibles de fundar grandes relatos, a la manera de mitos: reconciliación no es en sí misma una voz política; cuando no al ámbito de las relaciones personales, pertenece más bien al léxico religioso y, en la España de entonces, en la que todo era religión, que comunistas y socialistas hablaran de guerra fratricida y anunciaran una política de reconciliación no dejaba de despertar sospechas de mero oportunismo, de lobos con piel de cordero e imágenes por el estilo, que sin embargo no desalentaron a sus artífices: el de la reconciliación era un mito muy potente al que, antes o después, todo el mundo habría de recurrir.

Pues guerra fratricida, amnistía y su obligado corolario en la reconciliación nacional estaban tan internamente enlazadas como guerra contra el invasor, exterminio y escisión de España en dos: si en el mito de la dos Españas encontraron muchos la razón de una guerra de exterminio contra el invasor, en el mito de la reconciliación nacional fundaron otros la razón de la guerra fratricida de cuyo resultado había que olvidarse para construir otra nación y otro Estado. Un largo camino había recorrido la oposición al régimen salido de la guerra civil en los veinte años que median entre 1936 y 1956 hasta formular ese nuevo relato, que la llevará al encuentro de Munich de 1962 donde de

nuevo se ratificó la exigencia de amnistía y se escenificó públicamente, con discursos y abrazos, la reconciliación -aun si a los comunistas sólo se les permitió entonces una presencia en los pasillos- como prueba de que España estaba lista para emprender un proceso constituyente que condujera a una democracia en la que cupieran todos los españoles. Un camino, sin embargo, que costó más trabajo emprender a quienes procedían del régimen y que nunca recorrieron quienes se mantuvieron dentro de él.

Tal vez no exista mejor muestra de esas dificultades que el laborioso reconocimiento por la Iglesia de lo que en los medios de oposición y en el sentir mayoritario de las generaciones que no habían hecho la guerra era ya un lugar común desde los años cincuenta. Hasta la asamblea conjunta de obispos y sacerdotes celebrada en 1971, la Iglesia no se enfrentó de forma oficial al debate sobre su papel en la guerra civil. Allí, ante la asamblea, se presentó un proyecto de resolución en el que se reconocía humildemente y se pedía perdón "porque nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una gran guerra entre hermanos". Guerra fratricida y reconciliación eran ya expresiones adquiridas por el lenguaje de la oposición al régimen desde, al menos, 1956; esta original asamblea pretendía hacerlo suyo en 1971 identificándose como "ministros de reconciliación", diciendo "nuestro pueblo" donde sus antecesores proclamaron la única nación española, y definiendo aquella guerra antes sostenida contra razas forasteras con la solemne y un tanto enfática expresión de "gran guerra entre hermanos". Pero este texto, que transformaba de arriba abajo el discurso católico de la guerra y el papel de la Iglesia en ella no obtuvo mayoría suficiente para pasar en primera votación y, sometido a segunda, se quedó con 123 votos a favor por 113 en contra y 10 abstenciones. No se aprobó, pero lo que en él había explícito formaba parte ya de la actitud de muchos católicos desde que el Concilio Vaticano II hubiera iniciado años antes sus trabajos.

MEMORIA DE LA GUERRA

Cuando, quince años después de tan elocuente votación, transcurría el cincuenta aniversario del comienzo de la guerra civil, ayuntamientos, gobiernos autonómicos, bancos y cajas de ahorro, ateneos y universidades organizaron decenas de coloquios y congresos con la participación de un buen número de historiadores y la asistencia de un público en ocasiones muy numeroso. A pesar de una atención exhaustiva a los pormenores de la guerra, no faltaron luego las denuncias del silencio que los poderes públicos habrían tramado al negarse a organizar una gran celebración nacional conmemorativa del 50 aniversario de la guerra civil. Un excelente historiador británico vinculaba en fechas recientes nuestra "señalada repugnancia" a publicar obras sobre la guerra con el famoso "pacto del olvido" que habría impulsado al gobierno socialista de 1986 a no celebrar su aniversario. La guinda la puso un corresponsal de *The Times* cuando, otros diez años después, aseguraba que los españoles debemos leer a los británicos para enterarnos de lo que pasó en España porque, a 60 años de su fin, vivimos "atenazados por el tabú de la guerra civil".

En descargo de esta majadería del corresponsal inglés habría que señalar que no es el único; no faltan entre nosotros quienes a menudo repiten el tópico de que existe en España una gran dificultad para hablar de la guerra civil, o lamentan que hasta el día de hoy no hayamos asimilado esa experiencia histórica, que todavía tengamos pendientes no se sabe bien qué cuentas con el

pasado. Dificultad de hablar, llamativa ausencia, cuentas pendientes: son afirmaciones que contrastan con la ingente cantidad de libros publicados sobre la guerra. De ella se comenzó a hablar así que terminó y pueden contarse por miles las memorias de los protagonistas, los estudios monográficos, los artículos, las películas y los documentales, las obras literarias. Se han celebrado, aquí y fuera de aquí, decenas de coloquios y debates, y aunque la Guardia Civil siga custodiando celosamente sus secretos, se ha investigado en los cementerios, en los archivos judiciales y en los militares; han aparecido libros con apéndices de cientos de páginas con los nombres de los muertos y la fecha de su asesinato o ejecución. Es cierto que en España, los años de la dictadura estuvieron llenos del griterío de unos y el silencio de otros, pero es sencillamente absurdo seguir hablando de olvido y de silencio cuando resulta imposible moverse entre las montañas de papel crecidas desde el 18 de julio de 1936.

Entonces ¿por qué esa opinión generalizada sobre el silencio que todavía hoy nos atenazaría cuando se trata de la guerra, por qué la afirmación tan extendida sobre el olvido de sus víctimas? Quizá porque se confunde la amnistía con la amnesia. Es necesario recordar que la política de olvido como base de una amnistía general se formuló varias décadas antes de la transición y no tiene nada que ver con un vaciado de la memoria, todo lo contrario. Desde 1937 en el presidente de la República y entre pequeños grupos de exiliados, desde 1944 en grupos de la oposición interior, desde 1948 en monárquicos y socialistas, desde 1956 en la nueva generación nacida durante la República y la guerra, desde 1962 entre los reunidos de Munich y en el nuevo movimiento obrero, la exigencia de una amnistía general como umbral a la democracia jamás tuvo nada que ver con una general amnesia. Por el contrario: cada vez que se hablaba de amnistía se recordaba necesariamente la guerra, como aparecía en la resolución del VI Congreso del PCE, en 1960, cuando se proponía como una de las bases del pacto de las fuerzas antifranquistas una "amnistía general... extensiva a todas las responsabilidades derivadas de la guerra civil, en ambos bandos contendientes". Decir amnistía equivalía a nombrar la guerra civil. Sólo la guerra daba sentido a la amnistía; sólo el recuerdo podía llenar de contenido político la decisión de olvido.

Para entender la razón y el contenido de nuestras memorias y de nuestros olvidos, es preciso por tanto insistir en que el nuevo lenguaje sobre la guerra civil a base de voces como catástrofe nacional, tragedia, guerra fratricida, amnistía, olvido, responsabilidad compartida, reconciliación, no esperó a la transición a la democracia para hacer acto de presencia, como no fue tampoco una invención de la transición la decisión de olvidar un pasado del que quienes así lo decidieron no sólo se acordaban sino que lo llevaban grabado a fuego en su memoria, cuando no en sus cuerpos. No a los años de la transición, sino a ellos, a los que, aun habiéndolo sufrido, recitaron ese pasado como guerra fratricida, es a quienes debemos en su origen la decisión de olvidar. Pero una decisión de olvidar no es lo mismo que una amnesia. Olvidar sin más es como no recordar lo ocurrido, borrarlo, dejar de tenerlo en la memoria. Decidir olvidar es, por el contrario, enfrentarse al pasado, recordarlo, tenerlo presente y llegar a la conclusión de que no determinará el futuro, de que no se va a interponer entre el presente y lo que se proyecta como posible en el futuro.

Es cierto que esta política de reconciliación se concibió por sus autores, que hicieron la guerra, y por la generación de demócratas antes de la

democracia, que en los años sesenta se situó en su estela y acabó tomando su relevo, como arma contra la dictadura: la reconciliación no llegaba a quienes seguían pronunciando su particular discurso de la guerra contra el invasor o contra la Anti-España y festejando, ellos sí, cada año su comienzo, con sus fiestas, sus desfiles, sus caídos, sus mártires. La radical novedad de la transición, lo que todo el mundo tuvo que aprender porque no venía explicado en ninguna lección anterior ni nadie había escrito en ninguna pizarra fue que la decisión de olvido se ampliaría en sólo unos meses desde las "fuerzas antifranquistas" hasta abarcar a los herederos directos del franquismo. La transición no era nueva, sino vieja de treinta años, en su exigencia básica: fin del discurso de la guerra, reconciliación, amnistía y renuncia a la revancha. La transición fue nueva en sus agentes. En 1976, no se trataba, como en los años cuarenta, de que un católico, antiguo dirigente de la CEDA, que había colaborado en la financiación de la rebelión militar, se encontrara en el despacho del secretario del Foreign Office con un socialista que había traficado con armas para organizar una insurrección contra la CEDA; tampoco, como en 1962, de que un monárquico se viera en Munich con un republicano, un demócrata cristiano con un socialista; ni siquiera, como en tantos conventos y sacristías de los años sesenta, de que se sentaran juntos comunistas y católicos. Ahora de lo que se trataba era de que el secretario general del partido comunista, responsable del orden público en el Madrid sitiado de noviembre de 1936, se viera y se entendiera con el último secretario general del Movimiento Nacional, que recién venía de colgar en el trastero la camisa azul.

Pero esta imprevista novedad no hizo más que llevar hasta su última consecuencia el principio de amnistía general y renuncia a represalias enunciado por los mayores como imprescindible exigencia de la apertura de un proceso constituyente. Del Rey abajo, a nadie se preguntó por su pasado con tal de que en el presente se dispusiera a participar en el proceso constituyente y se atuviera a sus resultados. El aprendizaje democrático que la oposición había realizado en su lucha contra la dictadura desde los años cuarenta, que la nueva generación reafirmó desde los cincuenta, se completó veinte años después con esta última lección impuesta por una rapidísima percepción de los límites del poder de cada cual. La decisión de olvido se completó así con la necesidad de conducir el proceso de manera que nadie dispuesto a aceptar las nuevas reglas se quedara fuera. Para lograrlo fue necesario, paradójicamente, recordar. En este sentido, se podría decir que fue la memoria de lo que ya casi todos entendían como trágica escisión de la guerra la que actuó como refuerzo de un consenso que era parte de la cultura política de los españoles.

Al final, resultó que la potencia del mito de la reconciliación como un relato que daba sentido al futuro fue tal que todo el mundo vino a abreviar en sus aguas. Los políticos, desde los azules a los rojos de antaño, descubrieron el placer de encontrarse y presumieron de un alto grado de integración institucional en los contactos, entrevistas personales, confesiones de mutuas simpatías y, finalmente, en la disposición, alentada por los resultados electorales, a que el nuevo edificio constitucional se levantara por consenso. Esta práctica de la política como transacción y acuerdo entre elites procedentes del régimen y de la oposición, construida sobre una decisión de olvido del pasado, sobre el mito de la reconciliación que había venido a liquidar en la conciencia colectiva, dos o tres décadas antes, al mito de la dos Españas en eterna pugna exclusivista, es lo que constituye la radical novedad de la transición a la democracia y lo que la diferencia de cualquier otro intento

anterior: de la revolución gloriosa de 1868, desde luego, y también, aunque algunos soñaron con repetir la historia, de la gran fiesta popular de 1931. La transición fue menos excitante que una revolución o que una fiesta, pero fue mucho más eficaz y duradera en su capacidad de integración y en la solidez de sus resultados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar Fernández, Paloma, *Memoria y olvido de la Guerra civil española*. Madrid, Alianza, 1996.
- Ayala, Francisco, "Diálogo de los muertos. Elegía española" [1939], en *Los usurpadores*, Madrid, Alianza, 1988, págs. 157-165.
- Azaña, Manuel, *La velada en Benicarló*, en *Obras Completas*, ed. de Juan Marichal, México, Oasis, 1967, vol. III, págs. 379-460.
- Castilla del Pino, Carlos, *Pretérito imperfecto*, Barcelona, Tusquets, 1997.
- Cueva Merino, Julio de la, "El anticlericalismo en la Segunda República y la Guerra civil", en Emilio La Parra y Manuel Suárez, coords., *El anticlericalismo español contemporáneo*, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998.
- Delgado, Manuel, *La ira sagrada. Anticlericalismo, iconoclastia y antiritualismo en la España contemporánea*, Barcelona, Ed. Humanidades, 1992.
- Preston, Paul, *La política de la venganza. El fascismo y el militarismo en la España del siglo XX*, Barcelona, Península, 1997.
- Ranzato, Gabriele, ed., *Guerre fratricide. Le guerre civili in età contemporanea*, Turín, Bollati Boringhieri, 1994.
- Ucelay Da-Cal, Enric, "Buscando el levantamiento plebiscitario: insurreccionalismo y elecciones", en Santos Juliá, ed., *Política en la Segunda República*, *Ayer*, 20 (1995) págs. 49-80.